

Plaza pública

Tijuana: la muerte tiene permiso

Miguel Ángel Granados Chapa

Tal vez el embajador Antonio Garza deba hacer un reclamo al gobierno mexicano sobre la inseguridad creciente en Baja California, en Tijuana particularmente, para provocar una reacción por lo menos visible, si no eficaz, contra el crimen organizado. Cuando llamó la atención gubernamental sobre Nuevo Laredo, el año pasado, y sobre Oaxaca, hace unas semanas, de inmediato se produjo una reacción que no había sido suscitada por la exigencia de los ciudadanos. Se atenuaría de ese modo la falla de un pronóstico hecho por el Presidente Fox al comenzar su gobierno: "Estoy seguro de que en un término de seis meses debemos limpiar Tijuana". El domingo pasado concluyó en Mexicali una muestra de aquella demanda de la gente. Dieciséis días después partir desde San Quintín, más allá de Ensenada, y tras recorrer 476 kilómetros, llegó a la capital de Baja California una caravana que lo mismo era identificada como Marcha ciudadana por la paz que como Marcha por las víctimas de la inseguridad. Organizada por el Consejo ciudadano de seguridad pública, encabezado por Alberto Capella Ibarra, cientos de personas cruzaron la porción septentrional de la península para hacerse oír por las autoridades. Pero hubo algunas que también quisieron ser escuchadas: En La Rumorosa, agentes ministeriales amenazaron a los caminantes y en otro punto del recorrido el subsecretario de gobierno estatal Macario González alcanzó al desfile ciudadano e increpó a sus integrantes. En contraste, el gobernador Eugenio Elorduy y su procurador de justicia, panistas, así como el alcalde capitalino, priísta, se unieron a la marcha en su porción final, quién sabe si para mostrar solidaridad con los deudos de las víctimas (que constituían buena parte de la caravana) o para soslayar que la acción ciudadana era un reclamo a sus omisiones. En el kilómetro 70 de la carretera Tecate-Mexicali, la marcha inauguró, con una ofrenda en el día de los fieles difuntos, un altar permanente, que consigna los nombres de las víctimas de la violencia criminal que se ha enseñoreado en aquella entidad. En lo que va del año ha habido más de ciento cincuenta secuestros, y mientras la protesta recorría los caminos, se cruzó la línea de los trescientos ejecutados. A veces los crímenes se cometen a la luz del día, como el del 31 de octubre, en que perdió la vida la dueña de una estética en Tijuana, asesinada por su parentesco con Miguel Díez Castillo, apodado El Buda, a quien se imputa el pitazo que permitió la captura de Francisco Javier Arellano, El tigrillo. Otras veces las víctimas aparecen baleadas, con señal de tortura, con las manos atadas a la espalda. Blancos frecuentes son agentes o jefes de policía. El 24 de septiembre fue ultimado Arturo Rivas, el 25 de octubre Álvaro Abraham Álvarez, y Fernando Morales Juárez al día siguiente. El dos de noviembre, cuando completaba su jornada y a bordo de su Cherokee 1998 se dirigía a su domicilio el subjefe municipal Felipe Antonio Cavada fue interceptado por gente que al parecer conocía, y que lo asesinó desde otro vehículo. El mismo jefe de la policía tijuanense, Héctor Gaxiola, escapó ileso de un atentado el jueves 9 al mediodía, en que pereció uno de sus escoltas. Pero horas después, anteayer viernes, su cuerpo y el de su hermano Gerardo fueron hallados en un camino de terracería, sus cuerpos destrozados por andanadas de armas calibre .223. Los peritos contaron hasta ciento once impactos en las víctimas. Tras el ataque fallido en la frecuencia radial de la policía se escucharon amenazas: "Van cinco, faltan seis" (Reforma, 11 de noviembre).

De este asesinato se sabe menos que del anterior, porque aquel, el de Cavada, fue cometido delante de testigos, que hicieron saber a la autoridad que uno de los vehículos era una pánol dorada, lo que permitió su búsqueda y localización, y el hallazgo en su interior de un rifle de asalto AR-15 con 39 cartuchos útiles. Se vio que los asesinos estaban uniformados, lo que no siempre indica pertenencia a un cuerpo policiaco pues pueden disfrazarse, pero el vehículo ofreció un vínculo más cierto con la propia policía municipal a que pertenecía la víctima. Se trataba de una camioneta asegurada (es decir, en poder de la autoridad por ser parte de un ilícito) y hace poco la había solicitado en resguardo el agente **Jorge Antonio Vera Ayala**, que fue llamado a declarar a la Procuraduría estatal sin consecuencias inmediatas. **Vera Ayala** no es un gendarme cualquiera. Es miembro de la escolta del alcalde **Jorge Hank Rohn**, un cargo que por así decirlo heredó de su padre Antonio **Vera Palestina**, que antaño se desempeñó como jefe de seguridad del Hipódromo de Agua Caliente, por muchos años el principal negocio del hijo menor de Carlos Hank González. En abril de 1988, **Vera Palestina** y su subordinado Victoriano Medina Moreno asesinaron a Héctor Félix Miranda, conocido como El gato, quien irritaba a Hank y era uno de los dos directores del semanario Zeta, con Jesús Blancornelas. Ese periódico ha sostenido que **Vera Palestina** y Medina Moreno fueron sólo autores materiales de un crimen encargado por su jefe, que no sólo ha permanecido impune sino que ahora gobierna esa ciudad. Durante mucho tiempo, Hank Rohn protegió la fuga de los homicidas y asistió a sus familias. Lo hace todavía, como se ve por la proximidad que dispensa a **Vera Ayala**. Su padre, detenido al fin, purga una larga sentencia en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jal. Los ataques a jefes y agentes policiacos en Tijuana son parte del complejo cuadro de ajustes y complicidades que permiten la prosperidad de la delincuencia organizada en la frontera y en el resto de Baja California. Hace no mucho el procurador Daniel Cabeza de Vaca, sin mayor autoridad moral para hacerlo, hay que decirlo, reprochó a Hank Rohn sus omisiones en diagnosticar el estado de su policía y la implementación de las medidas correctivas del caso. Pero el alcalde no conoce límite ni freno, ni orientación alguna.

Se ha pretendido inhibir de varios modos la insistencia de Blancornelas y su semanario en la culpabilidad de Hank Rohn. El propio Hank González llamó al periodista a su mansión en la ciudad de México para ofrecerle dinero sin límite a cambio de su silencio. Otros mecanismos buscaron una mayor contundencia: hace nueve años, el 27 de noviembre de 1997 fue atacado con ferocidad que casi lo mató (y sí privó de la vida a su chofer-escolta). Y a mediados de 2004 uno de los editores de Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, fue también acibillado en Tijuana. En febrero pasado, la revista californiana LA Weekly publicó un extenso reportaje sobre Tijuana y su alcalde, titulado "La isla de **Jorge Hank Rohn**". El autor del texto, Josh Kurn, entrevistó a Blancornelas, quien le confió que estaba a punto de retirarse cuando el hijo del profesor fue elegido presidente municipal, y entonces se dijo: "Tengo que seguir". Dijo el reportero (según la traducción publicada por Proceso el 15 de marzo):

"Ya casi han pasado 20 años desde el asesinato de Héctor Félix Miranda, pero éste sigue siendo el motor de la misión de Blancornelas en Zeta. Los asesinos de Félix están en la cárcel, pero el hombre que Blancornelas considera como el último responsable de ordenar el asesinato, **Jorge Hank**, no sólo se halla libre sino que es el funcionario electo más poderoso de la ciudad. Para el editor, es una simple cuestión de atar cabos: los asesinos eran empleados de Hank, fueron pagados con dinero proveniente de Caliente y muchos creen que sus familias están en la nómina de pago de Hank...

"Hace algunos años, el caso fue reabierto por la Sociedad interamericana de prensa en conjunción con la Comisión interamericana de derechos humanos. El primer periodista de Zeta directamente involucrado en la investigación fue Francisco J. Ortiz Franco, quien también publicó una serie de textos críticos contra los Arellano. Ortiz fue

asesinado a balazos en 2004. Hank fue el primer sospechoso pero, una vez más, no se levantaron cargos contra él". A pesar de que el desastre político de Roberto Madrazo —su protector, su socio, su hermano— disminuyó su poder, Hank Rohn lo suple con su fortuna, que crece en la expansiva operación de Caliente, su empresa dedicada a las apuestas en toda clase de deportes, cuyos establecimientos pueden hoy ser hallados por doquier. El pasado presente.— El 11 de noviembre de 2001 —se cumplieron ayer cinco años— fue elegido gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, el cuarto miembro de su familia en ejercer esa responsabilidad. Antes lo habían hecho su abuelo y tocayo, el general Lázaro Cárdenas del Río; su tío abuelo Dámaso y su padre Cuauhtémoc Cárdenas. Un lustro más tarde, la distancia que este último y el propio gobernador han mostrado con Andrés Manuel López Obrador, y la simétrica proximidad con el presidente Fox y con Felipe Calderón hace pronosticar a no pocas personas que el Ejecutivo michoacano será parte del nuevo gobierno, acaso como director de Pemex. Al igual que su abuelo, Cárdenas Batel nació en Jiquilpan, el 12 de abril de 1964. Estudió etnohistoria en la Escuela nacional de antropología e historia, y música en La Habana. (Tendría 18 años, y probablemente seguía esos cursos en la capital cubana cuando coincidimos en una memorabilísima cena convocada por el embajador saliente Gonzalo Martínez Corbalá, que le deparaba su amistad, que fue encabezada por el primer ministro Fidel Castro, que quiso personalmente asistir a su despedida, pues volvía a México para ser candidato a senador. Además del joven estudiante de música los invitados fueron Gabriel García Márquez, que estaba en la isla promoviendo la escuela de cine que ha patrocinado, y los ingenieros Gilberto Borja Navarrete y Carlos Legaspi, así como los periodistas Francisco Martínez de la Vega y Manuel Buendía y el autor de estas líneas). Dedicado un tiempo a la promoción cultural, Cárdenas Batel se entregó a la política cuando su padre fue por primera vez candidato presidencial, en 1988, y desde entonces lo ha acompañado en todas sus iniciativas. Además de ser miembro de órganos internos en el Partido de la revolución democrática, del que fue uno de los fundadores, ganó una diputación por mayoría en Apatzingán, en 1997, y tres años después se convirtió en senador, por la misma vía. Su victoria en esos comicios fue una suerte de ensayo para su triunfo en la contienda por la gubernatura, cuando venció al priísta Alfredo Anaya y al panista Salvador López Orduña, que hoy es alcalde de Morelia.

Por una diversidad de razones, entre las cuales la disputa por las rutas parece contar como elemento central, el narcotráfico y la violencia que lleva adosada han escogido a Michoacán, en los años recientes, como escenario para dirimir rivalidades. La criminalidad de este género, extendida por todo el país, ha afectado de modo particular a Michoacán, donde se han producido asaltos a prisiones para liberar a reos y una multiplicación de hechos de sangre, algunos en extremo graves como los que han hecho perder la vida a jefes policiacos, y otros crueles como el que desembocó en un tugurio uruapanense a cuya pista de baile fueron arrojadas cinco cabezas humanas. Tan cotidianamente ocurren actos de esta naturaleza que, por ejemplo en la prensa de ayer sábado se daba cuenta de dos asesinatos, uno practicado en Uruapan por individuos encapuchados que se ostentaron como policías y que dispararon 30 balazos contra un joven inerme. La otra víctima pereció en un enfrentamiento entre presuntos narcos en Aquila, Y en Tumbiscatio, protectores de mariguaneros fueron detenidos después de un tiroteo con soldados y agentes de la policía municipal. Otro género de violencia causó al gobierno de Cárdenas Batel, hace apenas unos meses, un importante conflicto político. Aceptó que fuerzas de seguridad local acompañaran a la Policía federal preventiva en el asalto a una empresa siderúrgica en Lázaro Cárdenas, para poner fin a una huelga de hecho del sindicato minero. La inesperada resistencia de los paristas empujó a las policías al empleo de armas de fuego, con las que privaron de la vida a dos trabajadores. Si bien el daño era irreparable, Cárdenas Batel reaccionó con prontitud y sensibilidad, que incluyó la

destitución de Gabriel Mendoza Jimenez, coordinador de seguridad pública y persona de toda su confianza.

Aunque no es un seguidor mecánico de las posiciones de su padre, Cárdenas Batel ha asumido una creciente distancia respecto de López Obrador. La ausencia del ingeniero de la campaña presidencial concluída en julio, y su aceptación de un puesto honorífico en el gobierno de Fox antes de la jornada electoral ha generado animadversión hacia esa familia en anchos círculos del lopezobradorismo. Aunque las cifras indican lo contrario, se ha acusado a Cárdenas Batel de no haber impulsado la candidatura presidencial de su partido en su estado con toda la fuerza posible. López Obrador tuvo cien mil votos más que Felipe Calderón, beneficiado éste por su oriundez, que favorece a un candidato que, además, lo había sido ya al gobierno del estado.

Se ha anatematizado a Cárdenas Batel, y tomado como señal de una opción política, el haber llamado Presidente electo a Calderón, a quien López Obrador considera espurio. Esta noticia fue publicada en 2006-11-11